

LIBERTAD PARA BIRMANIA

China está apoyando otro régimen despótico

Jody Williams

26 de septiembre de 2007

Con decenas de miles de manifestantes pro democracia protestando valientemente en las calles de Birmania, la atención del mundo se ha vuelto por fin a este país del sudeste asiático y a la brutal dictadura militar que lo controla. La junta militar de Birmania, que cambió el nombre del país a Myanmar, aplastó un naciente movimiento democrático en 1988 y después rehusó ceder el poder a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi y su partido la Liga Nacional por la Democracia (NLD) tras su amplia victoria electoral en 1990.

Después de la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre, el presidente Bush pidió imponer nuevas sanciones contra el régimen de Birmania y pidió a las naciones miembro a ayudar a acabar con este "reino del terror de 19 años". Pero no se esperaba que China, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, alzara su voz a favor del cambio. Mientras la atención mundial ha estado centrada en el soporte económico y militar chino a la guerra del gobierno sudanés contra los habitantes de Darfur, su implicación en otros regímenes despóticos no es en absoluto noticia. El pueblo birmano, sin embargo, entiende claramente el papel de China en su continuada opresión.

La relación de China con Birmania es la más próxima de todas las que tiene en el sureste asiático. Ve a esta nación como un aliado estratégico, codiciando el uso potencial de sus puertos en el Océano Índico y un acceso más fácil al petróleo de África y Oriente Medio. China ha proporcionado un apoyo económico clave para mantener su sombría economía a flote y ha construido carreteras, puentes, aeropuertos, plantas eléctricas, fábricas y redes de telecomunicación. También ha modernizado el ejército de Birmania, incluido un suministro de armas

valorado en 1,4 billones de dólares cuando la junta tomó el poder.

En junio se anunció que China comenzaría a comprar gas natural de Birmania y que los dos países estaban negociando acuerdos de minería en Birmania por parte de compañías chinas.

Cientos de miles de chinos viven en Birmania y ha habido protestas contra su creciente influencia económica y presencia.

Contra esta situación de fondo y durante casi dos décadas, la Sra. Suu Kyi y otros activistas han realizado repetidas peticiones de apoyo internacional para llevar a los militares a una mesa de negociación y comenzar la transferencia de poder que debería haber tenido lugar tras la victoria electoral del NLD en 1990. Trágicamente, la Sra Suu Kyi (conocida por la mayoría como "La Señora") ha perdido 12 de los últimos 18 años como prisionera política. Su más reciente arresto domiciliario comenzó en mayo de 2003 tras ser atacada su comitiva mientras se encontraba viajando a través de Birmania para dar mítines.

Justamente unos meses antes de su arresto, me las ingeníé para entrar en Birmania y encontrarme con la Sra Suu Kyi en su casa de Rangún, para discutir qué debería hacer la comunidad internacional para ayudar a su pueblo. Ella fue muy clara en el llama-



miento de su partido para que el endurecimiento de las sanciones económicas contra la junta militar no fuera alterado; que todas las inversiones en Birmania cesaran y que los turistas no gastasen su dinero o proporcionaran ningún visto de legitimidad al régimen visitando el país hasta que la democracia fuera establecida.

Desafortunadamente, la comunidad internacional en general, y China en particular, ha ignorado ampliamente su petición de apoyo.

Las protestas más recientes contra el régimen comenzaron a mediados de agosto después de que el gobierno doblara los precios de la gasolina. Pronto derivaron en masivas y no violentas protestas a favor de la libertad y la democracia. Hacia el final de agosto, miles de monjes y monjas budistas comenzaron a unirse a las protestas, incluso cuando la junta represalió y arrestó a un número indeterminado de manifestantes y activistas.

Menos conocido es que el 18 de septiembre, mientras las protestas crecían, los activistas birmanos (muchos de ellos ahora ocultos por temor a la represión) se las ingeniaron para enviar una carta al gobierno chino. Junto con los manifestantes ante las embajadas y consulados chinos en 15 ciudades y 10 países de todo el mundo, pidieron que Pekín acabara públicamente su apoyo a la junta y ayudase a lograr la reconciliación y democratización en Birmania.

Si China no quiere cambiar su política hacia Birmania de buen grado, debe ser pre-

sionada a hacerlo. De la misma forma que ha habido una condena pública sobre el apoyo de Pekín al gobierno sudanés y su apoyo a la guerra en Darfur, debe haber una condena similar sobre su implicación con la junta militar birmana.

China debe usar su “relación especial” con la junta para posibilitar la liberación de la Sra Suu Kyi y otros cientos (si no miles) de prisioneros políticos. Mientras esto se logra, los líderes mundiales deben unirse en un llamamiento por el final de la ley militar y la transferencia pacífica del poder que debió tener lugar en 1990.

Todos nos hemos sentido alerta por la carnicería de Darfur, cientos de pueblos destruidos completamente, cientos de miles de muertos y millones de desplazados por la guerra, el uso sistemático y generalizado de la violación como arma de guerra en la limpieza étnica que se está produciendo implacablemente en Jartum. Esta alerta ha liderado campañas muy efectivas para incidir sobre el gigante del petróleo de China (PetroChina), que negocia con Jartum. También se han escuchado repetidamente llamamientos a no apoyar el “Genocidio Olímpico” a celebrar en Pekín en agosto de 2008.

Esta presión pública tan intensa sobre China ha comenzado a dar resultados. Pekín finalmente se ha empezado a implicar en intentar resolver la crisis de Darfur, apoyando a un enviado especial a Sudán y se ha comprometido a enviar un contingente militar para





tomar parte en las operaciones de paz. Efectivamente, a primeros de mes, el enviado de los EE.UU. a la región de Darfur informó de progresos significativos hacia conversaciones de paz allí y acreditó a China como jugando un papel clave.

Es el momento de presionar a los líderes chinos a usar su considerable influencia en Birmania del mismo modo. La junta militar ha llevado a cabo una campaña de limpieza racial, ha realizado racias en miles de pueblos, matado a cientos de miles y desplazado a cientos de miles más. Como en Darfur, las mujeres birmanas son sistemáticamente violadas, cientos de miles de mujeres, niños y hombres se encuentran sujetos a trabajos forzados y el país informado con más niños soldados (algunos incluso con 7 años) de todo el mundo.

Con miles de monjes y monjas budistas manteniéndose en liderar a decenas de miles más en marchas no violentas por todo el país, debemos hacer todo lo que podamos para apoyar su petición de democracia y reconocer su coraje para afrontar la represión. Debemos incrementar la denuncia del peligro de la implicación de China con los militares birmanos tanto como lo ha sido en su apoyo a Jartum.

Dado que la economía China continúa creciendo, ésta necesita imperiosamente de recursos a lo largo del planeta. Nos debe quedar claro a todos que la política de Pekín de “no ingerencia” con los clientes económicos represores no puede ser tolerada. Debemos denunciar a las compañías chinas no sólo por el pueblo de Darfur, sino

también por el birmano, el tibetano, el congoleño, por no decir de los incontables millones de chinos a los que se les niega también sus derechos humanos.

Parafraseando a “La Señora” Aung San Suu Kyi, debemos usar nuestra libertad para promover la suya.

J. Williams, receptor del premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo como coordinador de fondos para la Campaña Internacional de Prohibición de Minas terrestres, es Tesorero de la Iniciativa Nobel para las Mujeres

(www.nobelwomensinitiative.org)

Traducción de Antonio Saa